

**LA TRIBUNA** | La actual crisis socioeconómica, con sus secuelas de injusticia y aumento de las desigualdades y la pobreza, constituye una amenaza a la democracia comparable a la que supuso el 23-F  
*Por Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional*

# Otro 23-F

A principios de 1981, España navegaba en la lógica confusión de una recién estrenada democracia. Casi cuarenta años de dictadura habían reprimido los pocos hábitos democráticos de un pueblo que casi nunca tuvo la oportunidad de decidir por sí mismo. Escasos paréntesis democráticos, como la fallida experiencia de la II República, no permitieron a los españoles adquirir una educación democrática para la que, como todo en la vida, se requiere tiempo. La muerte de Francisco Franco en 1975 abrió las puertas a un proceso de transición hacia un régimen constitucional democrático de una España empedregada y empobrecida durante siglos. Desde entonces, los españoles supieron superar las dificultades y trabajar para conseguir cotas de bienestar social jamás conocidas en la historia de este país.

El 23 de febrero de 1981, la tan deseada democracia estaba en peligro. El terrorismo de ETA y del Grapo amenazaba la estabilidad del Estado. Una profunda y endémica crisis económica, el todavía no resuelto problema de los nacionalismos periféricos y la debilidad política del presidente Suárez, acosado desde todos los frentes, debilitaban el poder del Estado. Unos militares, autopro-

clamados salvadores de la patria, aprovecharon este cúmulo de circunstancias para intentar acabar con el sistema democrático al que culpaban de todos los males de España. Fueron la inmensa mayoría de los españoles los que, con firmeza y serenidad, abortaron esta intentona golpista.

Treinta y dos años después, la democracia parece consolidada. Sí, se han conseguido muchos logros, independientemente del color político de los gobiernos. Por eso es importante recordar que las prácticas democráticas no se establecen en un instante, no son un milagro, son el fruto del esfuerzo colectivo constante y de la educación. El 23 de febrero de 2013, parece eliminada la amenaza de ETA y las Fuerzas Armadas son una insti-

tución muy bien valorada por los españoles, entre otras razones porque desempeñan su misión constitucional con absoluta profesionalidad.

No obstante, una corrosiva crisis socio-económica hace que aparezcan señales de alerta: paro insoportable, pérdida de bienestar social, incremento de las desigualdades y la pobreza, percepción de corrupción generalizada y, por tanto, creciente descontento social. La democracia no es posible cuando no se dan las condiciones para una vida digna a la que tienen derecho todas las personas. El sistema puede estar en riesgo y esta vez no porque unos militares golpistas quieran acabar con él, sino porque el deterioro de la convivencia puede llevar a procesos conflictivos de imprevisibles consecuencias. Se requieren reformas contundentes, reformas reales que redunden en una distribución más equitativa de la riqueza y en leyes que antepongan la dignidad humana a cualquier otro valor. Reformas para evitar que desaparezca las bases sobre las que se asienta la democracia. Este 23-F puede ser el momento para pensar si el camino actual es el adecuado y, sobre todo, para recordar que la democracia no es compatible con la desigualdad y la injusticia social.

**«Se requieren reformas contundentes, reformas reales que redunden en una distribución más equitativa de la riqueza y que antepongan la dignidad humana»**